

Licencia para matar

El oscurísimo incidente de Bilbao, en el que ha resultado muerto por la Policía un "ultra" de la derecha que esgrimió una pistola frente a un centinela, pone de manifiesto una vez más uno de los riesgos graves de este país: la diseminación de armas de fuego, la abundancia de licencias. Las armas son para matar. Que se posean con fines defensivos o agresivos es una cuestión de metafísica, no de función. Incluso el aspecto deportivo del arma no es más que una etapa —el perfeccionamiento del tirador y del arma—, para su finalidad real. La utilización de las licencias concedidas a través de la Federación de Tiro para otros fines parece demostrada: cada miembro de la Federación puede tener cinco armas cortas y cinco armas largas. Y hay 25.000 federados: 250.000 armas individuales por esa sola vía. Las atribuidas por vía de la Federación de Caza se evalúan en un millón, más. Se

dan también armas por vía política: a las jerarquías del Movimiento. Que ya no existe. No vamos a caer en la ingenuidad de atribuir el crimen al arma: el criminal sabe siempre cómo procurársela. Pero sí hay que advertir del riesgo de que una parte política de la población española posea armas que pudieran servirle frente a otra parte política que está inermes. Naturalmente que la solución no está en armar a los desarmados, sino en desarmar a los armados. Y está en vigilar estrechamente la utilización de las armas por parte de quienes las poseen por pretextos deportivos. Sobre todo, está en establecer la paz civil. Toda licencia de armas es, a la postre, una licencia para matar. El monopolio debe estar en unas Fuerzas Armadas a las que se juramente para que las utilicen en defensa de los ciudadanos y de la colectividad. Fuera de ello, todo roza gravemente en lo sospechoso. ■



Austeridad

La Administración española había sido calificada por el señor Garrigues Walker como "la más despilfarradora de Europa"; el anuncio de que los gastos oficiales van a ser recortados, hecho por el señor Sudrez en su alocución radio-televisada —una y mil veces, por cierto, según las más antiguas y totalitarias formas de la propaganda—, produce una natural desconfianza. Los anuncios de reducción de coches oficiales en un 25 por ciento, la congelación de sueldos ministeriales y supresión de algunos organismos considerados como ineficaces y no productivos no resulta suficiente. El ciudadano español es suspicaz en cuanto a la utilización invisible de sus dineros y al aumento creciente de burocracia. El Estado sigue siendo ostentoso. Cuando los diarios anuncian el modesto plan de austeridad oficial, coinciden con el relato pan-

tagruélico de un banquete ofrecido a la Organización Internacional de Turismo Asía: importación especial de viandas tenidas por exquisitas; perdices para cuya cacería se precisaron "cientos de escopetas entre las que se encontraban miembros del Gobierno"; menús en tela hechos especialmente en conventos de clausura; tres mil quinientos kilos de desperdicios recogidos por un camión especial de basura del Ayuntamiento de Madrid... Oponer a las exhibiciones de austeridad del relato o la mención de este banquete disparatado puede ser más que demagogia, pues aun siendo muchos los millones así despilfarrados —treinta, cuarenta millones?—, no representan nada frente a otros gastos superfluos. Pero, demagogia y todo, es un hecho visible como para que no provoque reacciones. Y las provocaría en las Cortes si Cortes hubiera realmente. ■

El incidente de Moscú

La extraordinaria amplitud concedida por la prensa española a la prohibición y discriminación contra el señor Carrillo en los actos conmemorativos de la revolución rusa en Moscú muestran que el excelente táctico del PCE tampoco se ha equivocado esta vez. Si se le hubiese permitido hablar, habría quedado como el defensor de las libertades y los derechos humanos en la ciudadela soviética; al prohibírsele, aparece como claramente distanciado de la forma de corrupción del comunismo que denuncia. Para algunos comunistas de otra cepa, como Lister, se trata de un acto de provocación. Para los otros grandes eurocomunistas europeos, el francés Marchais y el italiano Berlinguer, es una actitud embarazosa, que perjudica su delicada política. Desde capas de ética ideológica se mantienen dos puntos de vista opuestos entre sí: uno, que el señor Carrillo hubiera hecho muy bien en no dar lugar a un incidente que inci-

de en el malestar general del hombre comunista, y que el recuerdo de la revolución de octubre, que "es patrimonio de todos", según el propio señor Carrillo, no debía haber sido empañado por esta situación violenta; otro, que tanto que ideólogo de un comunismo de libertad y respeto mutuo tiene no sólo derecho, sino también obligación de predicarlo y de tratar de influir en el movimiento comunista internacional. Pero es imposible deslindar todos estos extremos de una táctica realista y actualista como definen sus políticos más allegados ("Santiago es realista y nada más", Alberti), que le ayudará a disipar vetos y enemistades, a conquistar para su partido votos de moderados y a tener una imagen eficaz en las próximas elecciones municipales. En cuanto a la actitud soviética, se ha manifestado una vez más como dictatorial y arbitraria: el señor Carrillo ha ayudado a este desenmascaramiento, y, sin duda, le será tenido en cuenta en sus relaciones con Occidente. ■